



(Arte)
Estampa Digital

Título:
Colgante con pelotica intrusa

Autor:

Luis Fernando Luna

Técnica:

Impresión Digital Giclée sobre papel de Algodón 255 gr.

Medida: 40 X 40 cm (Estampa 30 X 30 cm)

Edición de 25 ejemplares

EL CAFÉ MADRID, DE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL A REFUGIO DE TODOS

CAFÉ MADRID FROM A RAILWAY STATION TO A REFUGE FOR ALL

*María Daza*¹

Resumen

Este artículo pretende mostrar la complejidad de la situación de la población residente en el barrio Café Madrid de Bucaramanga, compuesta no sólo por desplazados que, después de catorce años aún viven en condiciones precarias, sino también por una comunidad receptora que, de igual forma, presenta aún índices preocupantes de pobreza e, incluso, se ha visto enfrentada a una nueva forma de marginalidad: la que resulta de sentirse excluida de los beneficios estatales obtenidos por aquellos que consideran invasores de su territorio y agentes de comportamientos indeseables. Se enfatiza en los factores que ocasionan fragmentación del tejido social y dificultan los procesos de autogestión.

Palabras clave: Tejido Social, migración urbana, Autogestión

Abstract

This article pretends to show the complexity of the population's situation living in the neighborhood Café Madrid Bucaramanga. This place is composed not only by display people, who after fourteen years still live in precarious conditions, but also by a host community, that similarly, still has worrisome rates of poverty and even has been facing a new form of marginalization: that is to be excluded from governmental benefits obtained by those who consider them invading its territory and agents of undesirable behavior. It emphasizes the factors that cause fragmentation of the fabric of society and undermine the self-management processes.

Keywords: Social Fabric, urban migration, self-management

1 Economista. Maestría en Estudios Europeos. Investigadora del Grupo Economía Social Facultad de Economía Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Introducción

El desplazamiento forzado -que ha marcado la historia colombiana durante varias décadas- se constituye en una de las manifestaciones más dramáticas del conflicto interno colombiano y se reconoce hoy como la más grave crisis humanitaria que ha vivido el país en los últimos tiempos. Como fenómeno complejo, el desplazamiento ha sido objeto de análisis de las disciplinas sociales, sin que se hayan agotado las distintas aristas desde las cuales puede ser abordado. Cuestiones como el desarraigo, las dificultades de inserción laboral y social de quienes lo sufren y los conflictos que surgen entre la población receptora y los “extraños”, se constituyen en temas que deben ser estudiados desde una perspectiva interdisciplinar, con el fin de orientar el diseño de estrategias válidas que permitan, desde la política estatal y la acción de los demás actores de la sociedad, la búsqueda de la reconstitución del tejido social. Tal como plantea Meertens,

“una mayor comprensión de esos procesos nos ayudará a identificar las enormes dificultades que experimentan, tanto las iniciativas populares como las políticas de atención institucional a población desplazada, para fomentar integración, convivencia y procesos organizativos en los lugares de llegada de los desplazados” (Meertens 2002, p 1)

En medio de profundas fracturas en la cohesión social, la población desplazada se enfrenta en nuestro país a una cotidianeidad atravesada por la vulneración de sus derechos, la estigmatización de su condición y la dificultad de integrarse a contextos –en la mayoría de los casos desconocidos– que provocan lo que algunos estudiosos han denominado, una “inserción precaria” en los nuevos ambientes socio-económicos, laborales y culturales (Meertens, 1999; Naranjo, 2004; Chávez Plazas y Ramírez, 2004). Adicionalmente los recién llegados, en la mayoría de los casos, se ubican en los barrios con mayores índices de pobreza y problemáticas sociales y, al hacerlo, profundizan y reproducen los procesos de marginalidad de la población residente en esos espacios, a la vez que generan dinámicas conflictivas que obstaculizan el restablecimiento de sus derechos. A esto se suma el desconocimiento de las estrategias diseñadas por el Estado en el marco de la política pública de atención a este grupo poblacional o la incapacidad de acceder a ellas.

El escrito se divide en tres partes: la primera describe los procesos históricos de configuración del barrio, como resultado de invasiones sucesivas ocasionadas por diferentes hechos políticos y económicos y por la aplicación equivocada de políticas públicas que, aún planteándose como alternativa de solución a las problemáticas sociales, han terminado por profundizar los fenómenos de pobreza, conflicto social y exclusión social. En la segunda parte se muestran datos que permiten cuantificar la situación de pobreza de la población, considerados aspectos fundamentales de derechos humanos como el trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Finalmente, se analizan aspectos importantes de un tejido social resquebrajado y de situaciones que dividen a la población y generan individualismo, que disminuye las posibilidades

de la autogestión, como posible vía para encontrar soluciones a los principales problemas de esta comunidad vulnerada y vulnerable.

1. Luces y sombras de un proyecto ferroviario

La historia de este barrio, que se ha construido y reconfigurado en diferentes ocasiones, hace recordar las palabras de la investigadora de la Universidad de Antioquia Gloria Naranjo (2001, p 1) al caracterizar el fenómeno del desplazamiento en Colombia:

“No se trata de procesos intensivos, circunscritos a períodos de tiempo cortos y predominantemente masivos; por el contrario, el desplazamiento en Colombia es un fenómeno extensivo, diluido en el tiempo, recurrente y continuo, que combina éxodos aluviales -familiares e individuales-, silenciosos y no visibles, con desplazamientos en masa que ponen en marcha, al mismo tiempo, pueblos enteros y pequeñas colectividades locales; a su vez, en el desplazamiento forzado se anudan huidas temporales y retornos azarosos, con el abandono definitivo de los lugares de origen y residencia”

Sus orígenes se enlazan directamente con la construcción de ferrocarriles en el siglo XIX (Bayona Sarmiento y Niño Sanchez, 2002). Signo de progreso en todo el mundo, en Colombia –y especialmente en el departamento de Santander– el ferrocarril generó grandes expectativas y profundas desilusiones. Se inicia con el propósito de promover el desarrollo económico y, además, mejorar la movilidad de la región, pero en lugar de esto y, debido a las distintas coyunturas económicas y sociales de nuestro país y a la situación de guerra permanente, terminó por contribuir a la creación de un barrio más en la periferia de la ciudad, al que nunca han llegado las manifestaciones del progreso.

Según Bayona y Niño, el proyecto del Ferrocarril de Santander -que se inicia en 1870 y se termina, inconcluso, en 1940- pretendía conectar la región nororiental del país por medio de una vía férrea que llegaría a un puerto sobre el Río Magdalena (Puerto Wilches) y así acercaría la Costa Atlántica a otros tramos férreos que finalizarían en Bogotá, para garantizar la fluidez del transporte de personas y carga por todo el territorio nacional. Durante casi setenta años que duró la construcción, diversos fenómenos nacionales e internacionales, como la guerra de los mil días entre 1899 y 1902 y la Gran Depresión, ocasionaron constantes retrasos, y muchas veces falta de financiación (Bayona Sarmiento y Niño Sánchez, 2002). Otros factores que incidieron negativamente en la construcción de la línea férrea fueron las huelgas de trabajadores ocasionadas por las precarias condiciones laborales y por maltratos de los jefes a los asalariados (Olarte Carreño, 2006). Adicionalmente, Olarte hace referencia a las constantes irregularidades en el manejo de los recursos por parte de las distintas administraciones, que contaron, en su momento, con la complicidad de empleados públicos tanto del departamento, como de la Nación.

En medio de todo tipo de inconvenientes y con un retraso de muchos años respecto al cronograma inicial, la vía férrea que unió gradualmente una serie de lugares del Magdalena Medio desde Puerto Wilches, finalmente se “asoma” a las inmediaciones de la capital de Santander y allí se detiene del todo, incapaz de confrontar el auge arrollador de las carreteras, proclamadas como las vías del progreso y el avance del siglo veinte (Valdivieso, 2001). La estación final fue denominada “Café Madrid”, por la gran cantidad de café que se cargaba, proveniente de los dos Santanderes, y Madrid por ser los propietarios del terreno -quienes inicialmente se opusieron a la construcción de la estación- provenientes de esta capital europea.

Muchos trabajadores de la construcción del ferrocarril y funcionarios del mismo se movilizaron hacia el sector, construyeron algunas casas por las que pagaban un arriendo a Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC) como empresa dueña del terreno, y adquirieron progresivamente los títulos de la propiedad. De acuerdo con el estudio de Navas (2010), en los bordes de la línea de la carrilera se inició también un rápido poblamiento, jalonado por el próspero comercio que generó la carga y descargue de productos transportados por el tren, la floreciente empresa de los Ferrocarriles Nacionales y un flujo constante de turismo local, motivado por el espectáculo de la llegada y salida del tren, lo que hizo que el barrio creciera rápidamente. El lugar se pobló, entonces, por personas relacionadas con esta obra de infraestructura, pero también por personas que vieron prosperidad y oportunidades de empleo. En 1941, se suspende este tramo del ferrocarril por no ser rentable, lo que ocasionó el cierre de la principal fuente de empleo y de supervivencia de los habitantes del barrio e inició una nueva fase de su historia, marcada por una acumulación de factores –cada vez más complejos- que llevaron a la fragmentación social y a los conflictos de exclusión social que se viven actualmente.

Según la autora precitada, la organización y adecuación de servicios públicos durante los primeros años, corrió por cuenta de los miembros de la comunidad, quienes se organizaron para la construcción de un acueducto rural que aún funciona para algunos sectores del barrio, el servicio eléctrico se gestionó con políticos de la época, la consecución del servicio de gas natural también fue gestionado por los habitantes en épocas más recientes y el servicio de aseo se inició, cuando algunos de los habitantes del barrio recolectaron algo de dinero para sobornar a los empleados públicos encargados de la recolección de basuras e invitarlos al barrio a desayunar. (Navas, 2010).

El arquitecto Torres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, afirma que:

“no se puede entender (...) la construcción de ciudad como la suma de fragmentos físico-espaciales, sino como la construcción dinámica de tejido social a través de los diferentes agentes que actúan y se superponen en ella, siendo estos la expresión y el reflejo de la dinámica económica, social, política e ideológica que en su interior se desenvuelve” (Torres Tovar, s.f., p 3).

Con ese concepto en mente, se puede afirmar que el proceso de asentamiento en el *Café Madrid* responde a las pautas de urbanización y masificación de las ciudades colombianas y latinoamericanas, en las que coexisten espacios bastante diferenciados, que muestran claramente las abismales diferencias económicas y sociales entre los grupos poblacionales y la distancia entre las formas de acceder a la ciudad y a los bienes y servicios relacionados con el hábitat. La dinámica de segregación físico-espacial termina por definir las zonas “residenciales” por oposición a los asentamientos “al margen” que constituyen la ciudad excluida, con altos índices de desempleo y de pobreza, con problemas psicosociales y dificultades insalvables para obtener recursos de la inversión estatal. Esta lógica conflictiva de la urbanización se intensifica en nuestras ciudades cuando empiezan a desestructurarse y repoblarse a partir de los flujos migratorios más recientes como resultado del desplazamiento forzado derivado del conflicto interno.

Desde los años cincuenta del siglo pasado, sobre las ruinas del proyecto ferroviario, el barrio creció de manera lenta pero constante. No existen estudios que permitan determinar el origen y las características de los recién llegados al barrio en ese tiempo, pero el análisis de la situación del país nos remite a la violencia bipartidista, al crecimiento de la agricultura comercial en zonas cercanas a la capital santandereana y a la descomposición campesina generada por estos procesos o por unas políticas públicas que promovieron el éxodo hacia las ciudades, por lo que es posible que una buena parte de ellos provinieran del campo (Martínez, 1986). Cuando, durante las décadas de los ochenta y los noventa, el conflicto colombiano se intensifica y adquiere lógicas renovadas por la aparición de nuevos actores y la consolidación del narcotráfico y del paramilitarismo, Bucaramanga se convierte en la ciudad receptora por excelencia de grupos poblacionales desplazados del Magdalena Medio –una de las regiones del país en la que la lucha por el control territorial entre la guerrilla y los paramilitares revistió un carácter más violento– y el *Café Madrid*, al igual que otras zonas de la ciudad, es un espacio abierto para quienes buscaban poner punto final a su tragedia.

El año 1998 marca un punto importante en la historia del barrio debido a que, para responder a una protesta de los desplazados sin techo de la ciudad –quienes bloquean la carretera que de Bucaramanga conduce a la Costa Atlántica– el alcalde de ese momento promete darles vivienda y traslada 180 familias desplazadas a las desocupadas bodegas de la empresa Ferrocarriles Nacionales como un “hogar de paso”, que terminó como estancia permanente para algunos. A partir de ese momento, llegaron otros desplazados a instalarse en sectores marginales del barrio quienes, como sus antecesores, construyeron “cambuches” improvisados en la cancha de fútbol y en otros espacios, y fueron “delimitando territorio”. El *Café Madrid* y la infraestructura de los FNC se convierten, así, en punto de llegada y techo para muchas personas desplazadas por el conflicto armado y la violencia en el país. Desde el año 2005, se suman a ellas, otros desplazados también,

ahora a consecuencia de los intensos inviernos que han azotado al departamento que ocasionaron el desbordamiento de los ríos y la pérdida total de la vivienda y los medios de subsistencia. La antigua próspera estación del ferrocarril de Santander es hoy refugio de muchos y, tal como se intenta demostrar en las líneas siguientes, hogar seguro para muy pocos.

2. El escenario: condiciones socio-económicas

Compartimos la visión de Naranjo y Hurtado cuando afirman que:

“acercarse a la relación ciudades y desplazamiento forzado, implica explorar las experiencias sociales y las formas de interacción e intercambio familiar, vecinal, urbano, las transacciones, las relaciones, la transposición y transferencia de límites entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, las situaciones de hecho y los derechos y la ley” (2002, p 2).

De acuerdo con Corredor (2004), son dos los grandes enfoques a partir de los cuales se ha conceptualizado e intentado medir la pobreza. El primero tiene que ver con su identificación con la escasez o ausencia de ingresos para adquirir un conjunto de bienes y servicios materiales y en él la noción de pobreza alude a

“factores materiales cuantificables, a aquellos parámetros que en una sociedad pueden ser considerados en un momento determinado como el mínimo vital necesario para poder vivir adecuadamente. El pobre es el que carece de estos medios y, por lo tanto, lo es en un sentido contextual, en función del propio desarrollo global y de los estándares de la sociedad en la que vive” (Tezanos, 1999, p 17).

El segundo, cercano a la perspectiva del Nobel de Economía Amartya Sen, concibe la pobreza como la privación de capacidades y derechos y, según la investigadora mencionada atrás es una perspectiva

“más integral de la pobreza, entendida como carencia y privación de capacidades, lo que está condicionado por la precariedad de las dotaciones iniciales que poseen las personas y que les impiden el ejercicio efectivo de sus derechos, por lo que se traducen en una baja calidad de vida” (Corredor, 2004, p 24).

Es interesante insistir en que, aún cuando las condiciones materiales no se excluyen de este último enfoque, su énfasis fundamental apunta a la imposibilidad de adquirir las capacidades que permiten a las personas importantes realizaciones o funcionamientos (Velásquez, 2010). Esto resulta de vital importancia para la investigación, dado que se trata de entender que la pérdida de bienestar no tiene relación únicamente con el abandono de tierras, activos o fuentes de supervivencia o con la disminución drástica de los ingresos y del consumo, sino que alude también

al deterioro en las condiciones de vida, a los patrones de vulnerabilidad que los hogares enfrentan en los municipios receptores y a las limitadas oportunidades para desarrollar una vida digna, en la perspectiva de Sen.

En nuestro país un indicador importante de pobreza lo constituye la estratificación urbana, que ubica a los más pobres en estratos uno y dos, según las condiciones de vida de las familias, como la calidad de la vivienda y la prestación de servicios públicos (para tener una idea de la situación de los habitantes del *Café*, es preciso anotar, de entrada, que no alcanzan a cumplir los requisitos para ser ubicados dentro del estrato uno). Uno de los índices internacionales valorados en Colombia, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es una medida básica que mide la pobreza de la población según el acceso a servicios sanitarios, condiciones de la vivienda, dependencia económica, inasistencia escolar y hacinamiento. A su vez, el Índice de Condiciones de Vida (ICV) combina la posesión de bienes físicos representados en las características de la vivienda y acceso a servicios públicos, el capital humano presente y potencial que se refiere a los años de educación de jefes de hogar y de los jóvenes mayores de 12 años, y la asistencia escolar de niños y jóvenes, entre otros aspectos. A partir de estos indicadores, se mostrarán algunas características del sector objeto de estudio de la investigación.

Para lograr un primer acercamiento a la situación socio-económica de los habitantes de *El Café*, en este apartado se exponen las conclusiones a las que han llegado algunos estudios sobre el barrio en lo que se refiere a los niveles de pobreza de sus habitantes, la mayoría de los cuales cabe dentro de estas concepciones, aun cuando se intenta adelantar algunas reflexiones más cualitativas que se complementarán en el siguiente capítulo.

• **Una vida en exclusión**

El barrio, situado al norte de la ciudad de Bucaramanga, conocido familiarmente como *El Café*, es parte de la Comuna 1, sector Ciudad Norte, está en la periferia norte del perímetro urbano. Se divide, a su vez, en varios sectores, con características diferentes, como se verá. Estos barrios del norte han sido catalogados como estrato social 1 y 2, *El Café* es en su totalidad estrato 1. Es necesario transitar por allí para viajar por medios terrestres hacia el norte del país, el anillo vial que desvía el tránsito de vehículos pesados es una vía principal del sector.

Hoy hay sectores en los que sólo existen cambuches como son *Corrales* y *Club Ferroviario*, un área que, en la época en que funcionaba el ferrocarril, era destinada al esparcimiento de los trabajadores, aquí existen aún los restos de una piscina, canchas de tejo, grandes salones de reuniones, un kiosco, poblados hoy con viviendas precarias. Aquí han construido espacios familiares alrededor de 30 familias, que comparten los baños. Las antiguas *Bodegas*, 13 en total, destinadas a almacenar el café y otros productos que se transportaban por el ferrocarril (Román Ordoñez,

2008), albergan cerca de 10 familias cada una, en promedio 42 personas que separan su privacidad familiar con tablas, plásticos o telas; algunos han construido “segundos pisos” o altillos, aprovechándose la altura de las bodegas, también baños y cocinas familiares en espacios de aproximadamente ocho y diez metros cuadrados. En una de estas bodegas también se encuentra un Hogar de Paso, administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que se han construido viviendas en iguales condiciones, con la diferencia que el espacio por familia es un poco mayor y se han destinado espacios para otro tipo de actividades comunitarias.

Los sectores en los que se encuentran tanto cambuches como casas de ladrillo y teja, son la mayoría y se conocen con los nombres de *Suiche*, *La Playa*, *El Túnel*, *El Cable*, *El Plan*, *Villa Alicia*, *Campamento Ferroviario*, *La Virgen* y *La Unión*, en donde se encuentra el Puesto de Salud, la Casa de la Juventud, el Salón Social y la nueva cancha de fútbol.

En 2004, el Instituto de Vivienda Social de Bucaramanga INVISBU inició un proyecto de construcción de Apartamentos, que entregó en septiembre del 2008 a familias desplazadas por violencia o por el invierno y a las constituidas por los llamados “pobres históricos”. Este sector está conformado por 8 torres con un total de 256 apartamentos de 32m² cada uno, en el espacio en el que, antiguamente, estaba situada la cancha de fútbol de los FNC. Después de entregados los apartamentos, los habitantes iniciaron varias acciones judiciales por la falta de ingresos que permitieran cubrir los costos de los servicios públicos. La construcción de los apartamentos se realizó como respuesta a las precarias condiciones de vida en cambuches de la mayoría de las personas que residían en el barrio. Hoy las personas reclaman por la calidad de construcción de estas viviendas que soportan familias de entre 3 y 7 personas - o más- en los reducidos 32m².

Son pocos los sectores del barrio formados por casas familiares de materiales resistentes -ladrillos y tejas de barro- como La ciudadela, La Loma, La Quinta y La Cuarenta, los dos últimos en los que están las casas viejas construidas en la época del ferrocarril para los trabajadores de nivel medio.

• Trabajo precario, informalidad y “vagancia”

Existe una amplia bibliografía que discute las profundas transformaciones en el mundo laboral producidas por los procesos de mundialización de la economía y, en la mayoría de los casos, se hace referencia a un deterioro de la calidad del empleo, que se explica por la tendencia a la tercerización, la flexibilización, el carácter no asalariado, los contratos temporales y la reducción progresiva de las prestaciones sociales asociadas a estos contratos (Bourdieu, 1999 ; Beck, 2000). Tal como afirma Maza (2007, p 72)

“Esto ha exigido que se generen múltiples conceptos para dar cuenta de esta realidad, desde la idea del trabajo informal, la precariedad y, a últimas fechas, el trabajo decente como una nueva utopía que debe ser debatida”

Afiche de la Casa de la Juventud, Comunidad del Santo Ángel



En Colombia esta problemática se ha profundizado en las últimas décadas, debido a que, si bien las cifras registran una disminución del desempleo abierto, el mercado laboral adquiere, cada vez más, las características anotadas arriba. Y si hacemos referencia a la población en situación de desplazamiento forzoso y a las comunidades pobres en las que se insertan los desplazados, el fenómeno adquiere visos alarmantes. Para decirlo en palabras de Ibáñez y Moya:

“Al perder los vínculos sociales y la inserción en las redes sociales con la comunidad, los hogares desplazados pierden mecanismos informales para mitigar choques. El proceso de asentamiento en el municipio receptor es, además, lento debido a la dificultad para generar nuevas alternativas de ingresos. Dadas las altas tasas de desempleo en las áreas urbanas y la baja dotación de capital humano de la población desplazada, los mercados laborales urbanos no absorben tales flujos de población de manera inmediata. La iniciación de proyectos productivos es pocas veces una opción pues la pérdida de capital como consecuencia del desplazamiento impide contar con un capital para invertir. Todo lo anterior ocasiona unas condiciones de vida sumamente precarias para la población desplazada en los municipios de recepción” (Ibáñez y Moya, 2006, p 3).

De igual forma, la fragmentación del tejido social y la falta de capacidades para el proceso de reinserción social y cultural se convierten en obstáculos a la hora de integrarse al mercado laboral, en muchos casos muy difíciles de superar.

De otra parte este fenómeno, estrechamente relacionado con la situación de desplazamiento, contribuye en gran escala a muchos tipos de violencia (Moser y McIlwaine, 2000), dentro de las cuales predominan la violencia familiar, especialmente cuando los hombres experimentan sentimientos incómodos por no poder desempeñar su papel de generadores de ingresos; el robo como recurso de supervivencia, que puede llevar a cometer crímenes mayores; la prostitución o la venta de drogas, como estrategias para contrarrestar la pobreza. Aunque la ciudad ofrece salarios muchas veces por debajo de los mínimos, discriminación laboral y empleos no calificados y sin seguridad social que no garantizan la supervivencia, los desplazados buscan las formas de conquistar sus derechos en un nuevo ambiente de vida. La opción del retorno a los lugares de origen en el campo no es hoy una alternativa viable, dado que el conflicto persiste en muchos lugares, la seguridad no está garantizada y es mucho más difícil acceder a los beneficios estatales de los que gozan en la ciudad (Zarama Vasquez, 2009).

Según el estudio de Navas sobre el barrio, la condición que tipifica la situación de trabajo de sus pobladores es la informalidad (Navas, 2010). El 53% de la población trabajadora gana menos de un salario mínimo, el 40% recibe mensualmente un salario mínimo y sólo el 7% de los encuestados gana más del mínimo legal. Respecto al tipo de actividades desempeñadas, el 54% se dedica a actividades independientes, oficios domésticos y varios, entre los cuales están los de “arenero”, vendedor ambulante, reciclador, “bultero” y “cotero”, los cuales no generan ninguna estabilidad laboral. De otra parte, el estudio citado concluye que, adicionalmente a que la población sólo tiene acceso a trabajos mal remunerados, en muchos casos se vulneran los derechos humanos por las malas condiciones de los espacios laborales, por la falta de reconocimiento de las prestaciones sociales básicas y por la percepción de los empresarios de que esta población es fuerte y “se somete a todo”, incluidas las jornadas extremas, con tal de sobrevivir. El trabajo infantil es otro de los problemas observados en el barrio y se constituye en una de las mayores causas de la deserción escolar.

El desempleo es bastante alto, sólo el 66% de las personas en edad de trabajar logra vincularse a actividades laborales informales como las mencionadas lo que les permite obtener ingresos, se considera desempleado, el resto, cifra que supera el promedio nacional y de la ciudad, esta afecta especialmente a los más jóvenes, es una cifra en aumento (Osorio y Villamizar, 2008). Las posibilidades de empleo son escasas, debido a la idea de que las personas que vienen de barrios excluidos y también los desplazados, son asociados con violencia y delincuencia. En una encuesta realizada entre las madres de familia del barrio, Navas encontró que la

“vagancia” término que se repite constantemente en diálogo con los habitantes (para hacer referencia al fenómeno de la población joven desocupada) se constituía en una de las problemáticas de mayor relevancia, en la medida que la relacionan con brotes de delincuencia, drogadicción y conflictos juveniles.

• **La educación: un sueño inalcanzable**

Para Sen (2000) la educación promueve la expansión de las capacidades, entendidas como las oportunidades reales que las personas tienen para poder garantizarse la vida y las actividades que tienen razones para valorar. Capacidad significa, en último término, la libertad de una persona de escoger entre diferentes maneras de vivir y de ser y, consecuentemente, el desarrollo humano debe entenderse como un proceso para ampliar las opciones de las personas y fortalecer las capacidades humanas que contribuye a la formación de capital social (Sen, 2000) y es instrumento esencial para el desarrollo integral de los individuos. Además, el derecho a la educación es fundamental no sólo porque le permite a la persona adaptarse a la sociedad sino también transformarla en el beneficio común e individual.

Muchos estudios en Colombia han demostrado que las condiciones laborales adversas a las que se enfrentan los desplazados se derivan, en gran medida, de los muy bajos niveles de educación con los que llegan a los sitios de acogida y con un acervo de habilidades que sólo son útiles para las actividades rurales a las que la mayoría de ellos estaba acostumbrada. El bajo nivel de escolaridad, en muchos casos, no les permite ni siquiera su incorporación a los programas regulares de las instituciones existentes como por ejemplo del SENA y, por lo tanto, dificulta enormemente la inserción laboral en el ámbito urbano, para lograr medios de subsistencia y satisfacer sus necesidades (Zarama Vásquez, 2009). En el país, los altos niveles de analfabetismo entre la población desplazada, que superan el 16%, y los bajos niveles de educación formal entre los jefes de hogar (quienes sólo alcanzan un promedio de cuatro años) se constituyen, entonces, en barreras muy difíciles de superar al momento de diseñar estrategias de inserción económica y social. (Zarama Vásquez, 2009). Respecto a la política educativa para la población desplazada, Mejía y Ramírez (2002) han resaltado la fragmentación de la intervención educativa, la carencia de respuestas específicas que respondan al perfil de la población objetivo, las debilidades del discurso pedagógico que sustenta las acciones de intervención educativa, tanto como la carencia de sistemas de información y seguimiento y de espacios de coordinación y complementariedad de acciones con otros sectores.

La situación en *El Café*, no difiere mucho de la que han detectado los analistas a nivel nacional: el analfabetismo de los adultos es una cifra bastante alta, según Navas (2010) el 13% de la población no tiene ningún tipo de estudio, el 28% sólo estudió algunos años de la primaria sin terminarla y estos dos grupos de personas suman el 41% de la población; únicamente el 17% ha terminado la primaria y solo el 1% afirma

tener algún título de educación superior. El 3% de los encuestados inicia un proceso educativo. Un obstáculo de los jóvenes de continuar estudios después del colegio es la imposibilidad de costear el transporte. En los últimos años se han creado colegios que hoy día cubren las necesidades de educación de los más jóvenes, pero en ninguno de ellos existen programas que atiendan, de manera concreta, los requerimientos de atención y formación de este tipo de población, por lo que los niveles de deserción superan a los que se presentan en otros asentamientos marginales de la ciudad, confirmándose en este caso las apreciaciones de Mejía y Ramírez que citamos atrás.

• **Vivienda: entre el *cambuche* y el micro-apartamento**

Como se ha mencionado, los sectores del barrio se pueden definir de acuerdo a tres tipos de vivienda: casas, apartamentos y *cambuches*. Según Navas (2010), el 60% de la población vive en casas, el 23% vive en *cambuches* y el 17% de la población vive en los apartamentos, construidos por INVISBU. El 56% de las familias del barrio tiene vivienda propia, el 20% son invasores del espacio público y, finalmente, el 24% de la población se ubica en viviendas arrendadas o de familiares.

Las condiciones de hacinamiento son bastantes frecuentes, no sólo en los *cambuches* sino también en los apartamentos e, incluso, en las casas. En algunos casos, más de dos familias comparten una vivienda. Para determinar este fenómeno, Navas estableció rangos, dentro del primero, (una y dos familias por vivienda) se encuentra el 89% de los encuestados, el 8% corresponde al rango dos, (entre tres y cuatro familias por vivienda) y al rango de más de cuatro familias por vivienda corresponde el 3% de las personas. Y al indagar sobre el número de personas que comparten habitación, se evidenció que el 11% de las personas comparten una habitación con más de cuatro personas, el 28% lo hacen con tres o cuatro personas y el 61%, con una o dos personas. En los ranchos o *cambuches*, debido a que son construcciones bastante inestables, no cuentan con divisiones, por lo que la intimidad de los hogares es bastante reducida, por no decir que inexistente. De estas condiciones materiales deficientes, se derivan una multiplicidad de problemáticas detectadas: embarazos tempranos, violencia intra-familiar, comportamientos incestuosos y conflictos inter-generacionales, entre otros.

Aún a pesar de que se sale de los límites de la investigación el análisis de las políticas públicas frente a la población en situación de desplazamiento, aquí es necesario recordar que el problema de la vivienda debe tratarse desde una concepción del hábitat en su dimensión integral, en la que se articulen las actividades productivas, las soluciones de vivienda de acuerdo a las características de la familia y las actividades de integración social, cultural y recreativa, no sólo para los recién llegados, sino para la comunidad en la cual se insertan los hogares de desplazados (Jolly, 2008).

- **Salud: una población en alto riesgo**

Son múltiples los factores que se suman para hacer de la población desplazada, un grupo en condiciones precarias de saneamiento ambiental y, por tanto, sometido a un alto riesgo de morbilidad. Las condiciones de la vivienda y la situación de hacinamiento mencionados atrás, el escaso acceso a los servicios públicos, principalmente a la recolección de basuras y el alcantarillado, la escasez de alimentos y la presencia de plagas, son factores que claramente juegan un papel importante en las condiciones de salud. Todos estos factores están presentes en el barrio objeto de estudio.

Aún a pesar de que Navas registra que la mayoría de las familias en el *Café* se encuentran cobijadas por el sistema de seguridad social del país - el 69% en el régimen subsidiado, el 23% en el contributivo y solo el 8% sin ninguna afiliación - (Navas, 2010), son frecuentes las enfermedades respiratorias, que los habitantes suelen relacionar con las emisiones de las fábricas de cemento cercanas. De igual forma, las precarias condiciones de habitabilidad multiplican los cuadros de enfermedades infecciosas, especialmente la diarreica aguda (EDA) y la parasitosis intestinal, que afectan en mayor medida a los niños. Con respecto a la seguridad alimentaria como base de una ración adecuada para construir una vida sana y desarrollo del ser humano, Osorio y Villamizar (2008) afirman en el *Café* el 71% de los hogares se encuentra en inseguridad alimentaria porque no puede gozar del acceso a los alimentos adecuadamente.

Tal como se menciona en un documento del Ministerio de Salud de Colombia,

“desde un punto de vista individual, (el desplazamiento) se asocia con interrupción o destrucción de los proyectos de vida y pérdida de seres queridos, bienes materiales y las fuentes habituales de reconocimiento familiar y social, sentido de pertenencia, identidad y autoestima. Muchas personas desplazadas, incluidos niños, niñas y jóvenes, han sido víctimas directas de hechos violentos como amenazas, torturas, secuestros y lesiones personales, o han sido testigos de actos violentos como asesinatos, masacres, secuestros y combates” (Ministerio de Salud, 2001 p 1)

y, por tal motivo, están sometidos a profundas presiones de orden emocional que pueden conducir a un deterioro de la salud mental.

Adicionalmente, las nuevas formas de convivencia en *cambuches* sin divisiones o en viviendas compartidas por varias familias, generan también una serie de dificultades en la salud psicológica bastante complejas y difíciles de manejar y solucionar (Silva Arias, 2009). Segura y Meertens las describen como:

“conflictos y presiones que desarticulan los modos de vida y formas de organización de los hogares desplazados y aceleran la descomposición de los estereotipos sexuales, las relaciones tradicionales entre los sexos y las generaciones, erosionan

los soportes materiales y simbólicos de la preeminencia masculina y generan crisis en las identidades y en las relaciones afectivas y sociales” (1997, p 1).

En ese contexto, los principales problemas que afectan a los pobladores del barrio, al igual que en otros asentamientos precarios de Bucaramanga, son diferentes niveles de depresión y ansiedad, con mayor incidencia entre las mujeres, sobre las que recae una mayor responsabilidad y entre los jóvenes, quienes no encuentran facilidades para integrarse a un mundo extraño y hostil y, en muchas ocasiones, terminan en la drogadicción o el alcoholismo.

• **Los habitantes del barrio se auto-caracterizan**

Durante los catorce años de existencia de los asentamientos de desplazados en Bucaramanga, la población ha tenido diferentes percepciones sobre los problemas que tiene que enfrentar. En el año 2004, la mayoría de la población consultada, define como necesidades prioritarias la vivienda, el empleo y la atención en salud (Corporación Compromiso, 2006). Seis años más tarde, los habitantes del sector La Estación en el *Café Madrid*, consideraban como sus mayores problemas el consumo y venta de drogas y las precarias condiciones de las viviendas, debido a la mala calidad de las construcciones y la falta de servicios públicos. Se menciona también la “vagancia” de los jóvenes como otro de los principales problemas ya que genera, según los mismos habitantes, la delincuencia en el sector (Navas, 2010). Este cambio de percepción nos muestra, por una parte, una población en condiciones muy semejantes a las de cualquier asentamiento precario en Colombia, en donde las escasas oportunidades para lograr la supervivencia se compensan por los caminos de la ilegalidad y, de otra, refleja la incapacidad del Estado para atender y regular el fenómeno del desplazamiento y ofrecer una vida digna a quienes lo sufrieron.

En el año 2011, los resultados de una encuesta aplicada a los padres de familia del Colegio Minuto de Dios –que ofrece formación primaria y secundaria a la mayoría de niños y jóvenes del barrio– muestran que el consumo y venta de drogas persiste como el mayor problema de la comunidad. El desempleo también es definido como un problema relevante y se menciona la falta de tiempo de los padres de familia para dedicarse a sus hijos, y poder saber qué hacen los menores con el tiempo libre. Otro problema detectado es la preocupante deserción escolar, explicada en algunos casos por la necesidad del trabajo infantil y juvenil para incrementar los ingresos familiares y, en otros, que pueden ser la mayoría, porque los niños y jóvenes prefieren las calles a las exigencias del colegio. La oferta escolar que, como se decía atrás, puede satisfacer las necesidades del barrio, no resulta suficiente para encaminar los proyectos de vida de los residentes. Parecería, como lo afirman muchos estudiosos del tema, que el sentimiento por las múltiples pérdidas que sufren los desplazados –su vivienda, su trabajo, sus relaciones afectivas y vecinales, su papel en un conglomerado social– el profundo desarraigo y la hostilidad de buena parte de sus

conciudadanos, obstaculizan su inserción positiva en los nuevos espacios urbanos. Sobre ese reconocimiento, los proyectos educativos que se ofrezcan, deben asumir la especial condición de los habitantes del barrio y promover procesos efectivos de construcción de ciudadanía, sobre la base de nuevos referentes y nuevos proyectos de futuro.

3. Fracturas del tejido social: obstáculo para la autogestión

El concepto de “tejido social”, como lo define Romero Picón (2006, p 22), remite a un

“conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”

Son pocas las comunidades, vecindarios o barrios que, en épocas del capitalismo rampante, conservan una estructura social que permita establecer relaciones comunes para desempeñar la vida diaria, más bien el individualismo y la competencia son actitudes que sobresalen y el interés particular es primordial. Así las cosas, la construcción de la ciudad conlleva tensiones de todo tipo que producen fragmentaciones permanentes pero que, de igual forma, desencadenan dinámicas vitales marcadas por la solidaridad y la configuración de proyectos colectivos.

Para el logro de procesos significativos de bienestar general, no sólo de los grupos excluidos -población pobre y en situación de desplazamiento- sino de la sociedad en general, es importante la reconstrucción de un tejido social deseado, que permita a las familias en situación de vulnerabilidad, tener acceso y poder gozar de las capacidades y libertades (Sen y Kliksberg, 2007) para satisfacer sus necesidades básicas, aumentar el nivel de empleo, por medio de procesos de autogestión, que es la manera como se pueden asegurar soluciones de largo aliento. En este proceso no es posible desconocer la importancia del apoyo externo, expresado en ayuda psicosocial y en capacitación para el fortalecimiento de la acción colectiva.

El término autogestión ha sido abordado desde diversos ámbitos. Así, se habla de autogestión económica, social, política y pedagógica, entre otras. La autogestión es una acción autónoma de las personas de una sociedad, que tiene como fin realizar desde la planeación procesos para transformar una realidad. La autogestión comunitaria, según D'Ángelo (2004), sólo es posible cuando se logra la apropiación de los distintos recursos de competencia individuales y colectivos que incluyen la reflexividad, la creatividad, la interacción constructiva y la autorrealización social por parte de los miembros de una comunidad o grupo social, es decir, su empoderamiento.

Tal como ha sido resaltado por diversos autores

“el empoderamiento de los actores constituye la vía formativa, desde el nivel micro, para el logro del desempeño autogestivo, en tanto que los espacios sociales deben

propiciarlo, a partir de la descentralización y la flexibilidad de participación y la posibilidad de expresión y el posicionamiento reflexivo de los propios actores” (D’Ángelo Hernández, 2004, p 6).

Por esto, trabajar con una población vulnerable como es la comunidad en situación de desplazamiento, implica partir de la idea de que esta población puede y debe realizar procesos de empoderamiento y reconstrucción del tejido social que conduzcan a la autogestión comunitaria.

Sin embargo, es evidente que, cuando se trata de población en situación de desplazamiento, la inserción en los contextos urbanos puede lograrse de manera solidaria o de forma excluyente y conflictiva, de acuerdo a las historias pasadas de los grupos en interacción, de sus intereses y capacidad de acción, lo mismo que del ambiente institucional y cultural en el que se encuentren. Un dato para tener en cuenta en el caso que nos ocupa es que las familias reubicadas en el *Café* por haber sufrido desplazamiento –ya sea por la violencia o por otros factores- van a convivir con otras poblaciones vulnerables, señaladas en el artículo como «pobres históricos», con experiencias de exclusión laboral y sociales de más largo tiempo, que perciben a los recién llegados como incómodos vecinos, promotores de comportamientos inadecuados y competidores activos cuando se trata de obtener los beneficios estatales. Para acercarse al impacto de esta problemática, Romero se refiere a la tensión

“que se genera entre la población receptora y la población desplazada recién llegada (que) obstaculiza la integración entre las personas y el fortalecimiento de la solidaridad social. Esto no excluye la posibilidad de que se conformen pequeños círculos comunitarios. Sin embargo, en su interior predomina la desconfianza y el silencio” (Romero Picón, 2006, p 8).

Interesa, entonces, destacar las dificultades de sobrellevar la ciudad, sin recursos y en un ambiente desconocido, lo que significa conflictos, choques, destrucciones, reconstrucciones, presiones que desarticulaban los modos de vida y las formas de organización de los hogares, tanto en el plano de la identidad individual, como familiar y colectiva. (Bello, 2004; Segura y Meertens, 1997).

Los desplazados al llegar al sitio de acogida, *El Café*, iniciaron un proceso de creación de un tejido social representado en comunidades donde los espacios y las condiciones son tan estrechas que las relaciones entre las familias son obligadas, para poder sobrellevar las cargas que exige la ciudad en cuestión de espacio, recursos económicos y para compartir algunos servicios públicos, entre otras necesidades. Los *cambuches* improvisados fueron un inicio de “comunidad”. Las familias encontraron apoyo entre sus similares en su proceso de asentamiento que generó incipientes procesos de integración, ya que la supervivencia en condiciones rudas, con traumas parecidos, promueve la participación solidaria en la búsqueda de soluciones a los

problemas y los retos comunes. Al indagar sobre estos inicios, alguno de ellos afirma: “en los *cambuches* existía más solidaridad que en los nuevos apartamentos”.

Este inicio de tejido, que se construye al llegar a la ciudad o que los precede, como característica cultural campesina o de sus antiguos asentamientos urbanos y que se basa en la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo comunitario, se ha debilitado por las tensiones, conflictos, enemistades, egoísmos y una situación de permanente rivalidad entre los miembros de la comunidad. Los conflictos no se presentan sólo entre los pobres históricos y los desplazados, sino entre el mismo grupo de desplazados. Además, las situaciones de pobreza extrema con altos niveles de desempleo, de las difíciles relaciones entre pobres históricos y desplazados, de la falta de atención seria y desinteresada por parte del sector público, se suma a todo esto un manejo burocrático y clientelista de muchos proyectos que se llevan a cabo en el barrio e inducen a comportamientos que contribuyen a mayor exclusión, desconfianza, envidia y egoísmo en la población. A continuación se pretende profundizar en los aspectos que más inciden en los escasos niveles de autogestión comunitaria que se observan hoy entre sus habitantes.

Compartimos con Naranjo y Hurtado (2002) la visión de la ciudad y, en este caso, del barrio, como “campo de interacciones, negociaciones y disputas” (p. 2) su propuesta de indagar, desde una perspectiva compleja e interdisciplinar, sobre el impacto del desplazamiento forzado en la ciudad, las dinámicas que genera, los conflictos que produce y el tipo de ciudad y ciudadanía que, por esa vía, se están construyendo.

• **Los desplazados y la población históricamente pobre**

Como se mencionó atrás, la situación de las familias de desplazados en *El Café* (que suman el 34%, según el estudio de Navas referenciado atrás) no ha presentado mejoría: después de catorce años, muchas aún viven en *cambuches* en las Bodegas o en otros sectores del barrio y son precarias las condiciones de vida en lo que se refiere al acceso a los servicios públicos, la educación y la salud. Esta apreciación puede ser corroborada con los resultados de la Encuesta Nacional de Verificación realizada por el CID² de la Universidad Nacional de Colombia en 2008, en la que se analiza la situación de las familias desplazadas en todo el país, de acuerdo al grado de realización de un conjunto de derechos, y la comparación de las cifras de pobreza y de indigencia de esta personas. El estudio indaga por los ingresos antes y después del desplazamiento y, según la línea de pobreza, se constata que la primera pasó del 51,0% al 97,6%, y la segunda del 31,5% al 80,7%, datos que demuestran la profundización de las condiciones de vulnerabilidad a que hacíamos referencia atrás. (Zarama Vasquez, 2009).

2 Centro de Investigación y Desarrollo Universidad Nacional de Colombia

El restante 66% de las familias está constituido por los antiguos residentes del barrio, que en esta investigación hemos denominado población históricamente pobre -otros la llaman población receptora- muchos de sus integrantes han vivido allí por generaciones y perciben a los desplazados como intrusos y promotores de conflictos. Las opiniones de los habitantes del barrio nos permiten ilustrar esta contraposición entre *los de siempre* y *los recién llegados*:

“a los residentes siempre les ha tocado trabajar muy duro para conseguir lo que tienen, mientras las personas desplazadas solo necesitan pedir, hasta los mercados se les regalan”

afirma una residente, mientras un líder de la comunidad considera que:

“la población residente ha rescatado muchos de los proyectos propuestos, pues son personas más estables, mientras es difícil contar con los desplazados”.

Como afirman Castillo y Salazar (2008) la competencia de los desplazados con la población urbana pobre se puede explicar por diferentes razones entre ellas la lógica de la supervivencia, ya que el aumento de población parece complicar los procesos, la rivalidad por acceder a las escasas oportunidades laborales y educativas, además de una muy importante: la lucha por el reconocimiento social, que resulta fundamental para los dos grupos. Adicionalmente, en este caso juega un papel importante la rivalidad por pertenecer a redes u organizaciones públicas y privadas, a través de las cuales se puede acceder a recursos estatales o de cooperación internacional o nacional destinados a la población pobre. En Colombia no basta con ser pobre o indigente, es necesario demostrar hasta la saciedad que se es más pobre que otros para ser objeto de la política pública.

Muchos autores, entre ellos Jaramillo (2006), quien cita a Bello y Mosquera (1999), Agier y Hoffmann (1999), Meertens (1999), Naranjo (2004) y Villa (2005), evidencian este tipo de problemática en otras ciudades del país, y consideran el desplazamiento forzado como un fenómeno que produce segregación y exclusión, no sólo entre quienes lo sufren, sino también dentro de las comunidades receptoras. Esta tendencia impide a las personas restablecer su vida social, por la dificultad de los nuevos habitantes de los barrios de identificarse con los más cercanos, y de los antiguos para aceptar a los recién llegados como sus vecinos. Lo que sucede, en la mayoría de los casos, es que se promueven y ponen en circulación “una serie de representaciones sobre el «otro», el desplazado, una de las cuales pasa por asumirlo como alguien de no fiar” (Jaramillo, 2006, p 155).

Y, aunque existe discriminación, no se asume de manera consiente esta condición ni los problemas derivados de ella, no se debate sobre las situaciones dramáticas ni sobre la situación de vulnerabilidad. Gloria Naranjo (2010, p 12) afirma, refiriéndose a los desplazados,

“confundirse con los habitantes tradicionales de los barrios es una manera de mantenerse ocultos, de ser invisibles; la mayoría sabe que en un barrio existen más desplazados, pero nunca se reúnen para discutir su situación; como consecuencia de lo anterior, no existen formas organizativas propias que les permita gestionar recursos; son pocos los líderes que se preocupan por la situación de los nuevos vecinos; los perciben, saben de su llegada, hasta les ayudan con comida y ropa (sobre todo cuando se trata de sus propios familiares), pero no los asumen como un problema de los barrios que requiere atención”

Esta autora concluye que “Las relaciones entre desplazados y pobres históricos se debaten entre los sentimientos de piedad y solidaridad y los de rechazo y repudio” (p 12).

- **Los proyectos productivos y las ayudas**

En Colombia, a partir de 1994 cuando se reconoce oficialmente el fenómeno del desplazamiento, se empieza a diseñar una política pública que pretende defender los derechos de quienes lo sufren y garantizar su protección durante el proceso, como también al momento del retorno, reasentamiento o integración. Dentro de una cantidad de decretos, resoluciones, acuerdos y sentencias que conforman el cuerpo legislativo que tiene como fin proteger a la población desplazada y establecer las obligaciones del Estado frente a sus necesidades, se destacan la Ley 387 de 1997, la sentencia T-025, el Decreto 173 de 1998 y la Ley de víctimas del 2011, entre otras. Igualmente y como resultado de la proliferación de normas legales, surgen organismos como Acción Social convertida hoy en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), las unidades de atención y orientación (UAO), y un conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y otras acciones que buscan la atención a la población desplazada.

En el caso concreto de Bucaramanga, que cuenta con un *Plan Integrado Único para la atención a la población víctima del desplazamiento*, el marco legal reconoce el fenómeno y postula un “enfoque de derechos” para orientar la atención de manera integral. Así, se concibe el PIU como:

“un instrumento de la política pública para garantizar el Goce Efectivo de Derechos –GED–: La política pública de prevención, protección, atención integral y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, se fundamenta en un **Enfoque de Derechos**, lo que quiere decir que el PIU se debe orientar a que las personas afectadas por el desplazamiento forzado puedan gozar efectivamente de los derechos que les fueron vulnerados” (Municipio de Bucaramanga, Secretaría de Gobierno, 2011, p 11).

En este documento, se encuentra sólo una caracterización completa sobre la situación general de las personas en situación de desplazamiento de la región hasta

2011, se describe la región en términos del conflicto así como la legislación respecto al fenómeno, y se enumeran las acciones realizadas por el sector público con el propósito de atenderlo.

Al hacer un análisis crítico, Juliao Vargas (2011) afirma que la política se ha convertido en asistencialismo social al proveer de bienes materiales para la subsistencia y no mantener la dirección hacia el *Goce Efectivo de Derechos* como lo indica el enfoque de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así mismo, la política se ha quedado corta en materia de proponer una solución duradera a la condición de pobreza y desarraigo. Y, finalmente, no se reconoce la efectiva participación de la población desplazada, cuando se impide o no se promueven organizaciones propias y autónomas que la representen.

Algunas familias se han favorecido de las ayudas del Estado a la población desplazada y han logrado crear algún negocio para mejorar sus condiciones económicas por medio de proyectos productivos y ayudas otorgados por diferentes organizaciones, en términos generales puede afirmarse que en este espacio pesan más los obstáculos que impiden la recomposición del tejido social que los deseos de superar la situación de deterioro socio-económico. Adicionalmente, es evidente la desconfianza de la población frente a los criterios de selección de las familias beneficiarias de los proyectos, ya que muchas personas acusan a las entidades públicas y privadas de discriminación, de utilizar elementos de amiguismo o de no remitirse a las necesidades reales de los grupos desplazados. El clientelismo y la entrega de ayudas a cambio de respaldos políticos se constituyen, igualmente, en una problemática que afecta en gran medida el desarrollo de proyectos colectivos en el barrio ya que, según alguno de sus habitantes, “después de diez años de estar en situación de desplazamiento, se puede afirmar que la insolidaridad ha aumentado”.

La percepción sobre lo que sucede en *El Café* coincide con las conclusiones del estudio realizado por Arciniegas y Mejía (2010) en el que se analizan los proyectos de emprendimiento y fortalecimiento económico ejecutados por Acción Social entre 2005 y 2008 en el Área Metropolitana de Bucaramanga para las familias de desplazados, ya que los autores afirman que los proyectos productivos generan algunos beneficios, pero también revelan un alto grado de informalidad, no producen ganancias más allá de lo necesario para la subsistencia, no promueven empleo de calidad y no han logrado valorizarse en el tiempo. Según este estudio, los programas de generación de ingresos dirigidos a mujeres cabeza de hogar necesitan de mayor atención, deben ir articulados con programas de asistencia a las actividades del hogar como acompañamiento infantil y asesorías en alimentación, entre otros.

Aún a pesar de que vienen precedidas de buenas intenciones, las ayudas asistencialistas han generado y en ocasiones aumentado, los conflictos por muchas razones. Muchos de los proyectos no son sostenibles en el tiempo, debido a que el dinero que puede generar algún negocio pequeño debe usarse para cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios públicos, transporte y otros, lo

que impide reservar algún porcentaje de las ganancias para la necesaria reinversión o sostenibilidad productiva. Este fenómeno conduce al endeudamiento progresivo a situaciones de estrés e inconformidad. Para la comunidad es claro que los proyectos no son sostenibles, que la falta de una planeación de largo plazo es indispensable, que las ayudas momentáneas están generando conflictos y muchas veces violencia, esto se refleja en la frase de un entrevistado: “el asistencialismo desmovilizó a la gente”, al referirse a estas dificultades y al intentar trazar propósitos comunes.

Como un común denominador, los habitantes del barrio consideran que no existen criterios claros y rigurosos para definir el acceso a los programas y proyectos sociales y otras ayudas y que no se tiene en cuenta a la totalidad de los afectados por el fenómeno del desplazamiento. Se percibe una selección improvisada de beneficiarios que no se basa en un diagnóstico serio sobre las necesidades de la comunidad, o en lo que ellos mismos perciben como prioritario, razón por la cual se ha generado en los últimos años una competencia muy fuerte por acceder a las organizaciones donantes, debilitándose aún más el entramado de relaciones sociales. La configuración de la población actual como resultado de sucesivas oleadas de grupos de desplazados -que superponen características culturales e intereses diversos- complica aún más la situación del barrio. Las palabras de los entrevistados dan cuenta de esta problemática:

“considero que los beneficios deben ser para la comunidad y no para personas individuales”; “hay personas que han recibido más de tres ayudas para iniciar proyectos productivos, mientras otras personas no han recibido nada” o “cuando llegan ayudas para el barrio, algunos líderes sólo tienen en cuenta a los amigos, preferidos o allegados, entonces, estas actitudes causan conflictos en la población”.

Al indagar sobre el papel de los líderes del barrio existen diferentes opiniones, algunas bastante negativas: “existen líderes de líderes, algunos sólo ponen la zancadilla, en ocasiones los proyectos no pueden ser realizados por la oposición de algunos de ellos. Enseñan a ser egoístas”. Así las cosas, la generación autónoma de ingresos para individuos y familias, como pretensión válida de la política pública para resolver las necesidades más apremiantes, no fortalece las estructuras, valores y prácticas sociales sino promueve emprendimientos altamente competitivos y no solidarios. Estas políticas desconocen la importancia de una educación de calidad que desarrolle capacidades y valores comunitarios y garantice resultados de largo plazo en términos de convivencia y construcción de tejido social (Bustos & Sánchez, 2008).

Es muy importante y bastante representativo en el caso del *Café Madrid* el proyecto liderado por INVISBU que mencionamos anteriormente, la construcción subsidiada de ocho bloques de apartamentos, que fueron entregados a la comunidad. La opinión de las personas refleja, en este caso particular, la acumulación de factores de discordia a los que hacíamos referencia en los párrafos anteriores:

“algunas personas tuvieron acceso a vivienda en el sector o también a propiedad en el sector rural, pues algunos desplazados fueron beneficiados con lotes, otros además tuvieron acceso a dinero para mejoramiento de vivienda, mientras algunas familias no tuvieron oportunidad de acceso a ninguno de estos beneficios”; “antes de la construcción de los apartamentos, existía un amplio espacio de recreación para el barrio”; “la asignación de los apartamentos fue un proceso bastante irregular, hubo familias que llegaron a separarse para obtener más de un apartamento”.

Interesa destacar cómo los programas de ayuda pueden convertirse en un factor más de fragmentación social cuando se ejecutan sin tener en cuenta las particulares condiciones de vida de la población beneficiada, los intereses –en ocasiones contrapuestos– de los diversos grupos afectados por el fenómeno del desplazamiento y la falta de un proceso educativo que los prepare para construir relaciones comunitarias en medio del desarraigo y la exclusión social.

Conclusión: el *Café Madrid*, punto de encuentro

Al definirlo como punto de encuentro, se hace referencia a que en el *Café* se combinan y resumen las problemáticas derivadas de su doble condición: por una parte, el barrio responde a las pautas de desarrollo de la mayoría de las ciudades latinoamericanas en las que coexisten grandes diferencias económicas y sociales y en las que la dinámica de segregación físico-espacial ha definido las zonas “residenciales” por oposición a los asentamientos “al margen”, que constituyen la ciudad excluida y por otra, es espacio de recepción continua de grupos desplazados, fenómeno que profundiza, hasta el extremo, las condiciones de vulnerabilidad de su población.

Así, lo que demuestra este primer acercamiento a la realidad vivida por los habitantes del barrio es que el desplazamiento forzado y la dinámica de inserción en contextos marcados por precarias condiciones de vida, proporciona un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos conflictos que dificultan los procesos de reinserción socioeconómica y desalientan la autogestión. Con ello, la exclusión y el desarraigo no terminan con la llegada a los espacios de recepción sino que, en ocasiones, se extienden por generaciones o se transforman en problemáticas diferentes que comprometen, como en el caso que se estudia, a la población históricamente pobre que habitaba esos espacios, generando una competencia profunda entre diferentes tipos de marginados.

De igual forma, es posible afirmar a partir de esta experiencia, que la reinserción y la recomposición del tejido social no se logran a partir del diseño de políticas públicas y acciones asistencialistas que desconozcan las complejas interrelaciones que se entretienen en estos territorios de nadie y, mucho menos, cuando están mediadas por intereses políticos y clientelistas. Así como resulta casi imposible reformular

un proyecto de vida familiar e individual en 35m² de vivienda, es muy complicado convertir una mínima ayuda financiera en un capital-semilla para un proyecto productivo comunitario cuando, en uno y otro caso, la comunidad siente que se vulneran sus derechos. Por ello, una de las tareas más urgentes en este proceso debe ser la recuperación de la confianza de los actores sociales en el Estado, mediante una reprogramación de las acciones gubernamentales con una visión de largo plazo en la que se privilegie la auto-construcción de los habitantes del barrio como ciudadanos. Es necesario insistir, adicionalmente, en la urgente necesidad de re-direccionar -a partir de una juiciosa tarea de redefinición de las categorías de ayuda humanitaria y responsabilidad social corporativa- los programas y proyectos que comprometan a los demás actores sociales como empresas u organizaciones no-gubernamentales, para que su intervención en la problemática de esta población apunte efectivamente al restablecimiento pleno de sus derechos.

Además de la situación de pobreza referida al nivel de ingresos, existen muchas otras condiciones que no permiten a las personas del *Café* disfrutar de sus libertades y capacidades -según del concepto de Sen- para alcanzar cierto grado de bienestar. En conclusión, las propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes deben, no sólo enfocarse a la ayuda asistencial de corto plazo, sino a la construcción de un entramado social sobre el cual se soporte la definición de oportunidades de vida y auto-realización a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arciniegas, J., & Mejía, Y. (2010). *Evaluación del impacto del programa de generación de ingresos para la población en situación de desplazamiento forzado de AMB*. Recuperado el 2010, de Biblioteca UIS.

Bayona Sarmiento, M., & Niño Sánchez, J. (2002). *Del camino de Paturia al ferrocarril de Santander*. Bucaramanga: UIS.

Beck, U. (2000). *Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización*. Barcelona: Paidós.

Bello, M. N. (2004). Identidad y desplazamiento forzado, Desplazamiento forzado y refugio. *Revista Aportes Andinos Enero N° 8*.

Bourdieu, P. (1999). Actualmente la precariedad está en todas partes. *Contrafuegos, Anagrama*, 120-128.

Bustos, M., & Sánchez, J. (2008). *Análisis de resultados de la implementación de una estrategia de generación de ingresos en el proyecto*. Recuperado el 2010, de

Biblioteca UIS.

Castillo, M. d., & Salazar, B. (2008). Pobreza urbana y exclusión social de los desplazados. *Documentos de trabajo No 16 CIDSE*, 3 -31.

Chávez Plazas, Y. A. (2005). Representaciones sociales acerca del retorno en población en situación de desplazamiento asentada en el municipio de Soacha. *Tabula Rasa*, 271- 292.

Chávez Plazas, Y. A., & Ramírez, U. F. (2004). Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población desplazada. *Tabula Rasa*, 169.182.

Corporación Compromiso. (2006). *Caracterización sociodemográfica de la población en situación de desplazamiento*. Bucaramanga.

Corredor, C. (2004). Pobreza, equidad y eficiencia social. *Cuadernos PNUD-MPS Investigaciones sobre desarrollo en Colombia*.

D'Ángelo Hernández, O. (2004). ¿La autogestión local como vía para la transformación social? *Revista TEMAS*, 52-64.

Ibáñez, A. M., & Moya, A. (2006). ¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados?: análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción. *Documentos CEDE, Universidad de los Andes Bogotá*.

Jaramillo, J. (2006). Reubicación y restablecimiento en la ciudad. *Universitas Humanistica*, 143-169.

Jolly, J.-F. (2008). ¿Hilo de Ariadna o tela de Penélope? Una reflexión crítica sobre la política de vivienda urbana para la población en situación de desplazamiento en Colombia. *Cuadernos de vivienda y urbanismo*, 64-95.

Juliao Vargas, C. S. (2011). Los desplazados en Bogotá y Soacha, características y protección. *Paz y Conflictos*, 1-19.

Martínez, A. (1986). *Planes de desarrollo y Política Agraria en Colombia 1940-1986*. Bogotá: CID- Universidad Nacional de Colombia.

Maza, O. (2007). Trabajo precario: Notas para una aproximación conceptual. En A. Lodras, & otros, *Relaciones de poder y trabajo. Las formas contemporáneas de explotación laboral*. Buenos Aires: Poder y Trabajo.

Meertens, D. (1999). Desplazamiento forzado y género: trayectorias y estrategias de reconstrucción vital. En F. Cubides, & C. Domínguez, *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Meertens, D. (2002). Desplazamiento e identidad social. *Revista de Estudios Sociales*, 101-102.

Mejía, M. R., & Ramírez, J. E. (2002). *La respuesta educativa de emergencia en el desplazamiento colombiano*. Bogotá: Fundación C E P E C S - P C S .

Ministerio de Salud. (2001). *Perfil Epistemológico de la Población Desplazada en el Barrio Mandela*. Cartagena.

Moser, C., & McIlwaine, C. (2000). *La violencia y exclusion en Colombia*. Washington: Banco Mundial, Asdi.

Municipio de Bucaramanga, Secretaría de Gobierno. (2011). *PIU de Bucaramanga, 2011-2012. Plan Integral Único para la atención integral a la población víctima del desplazamiento*. Bucaramanga.

Naranjo, G. (2001). El desplazamiento forzado en Colombia. Reinención de la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacional. *Scripta Nova*.

Naranjo, G. (2004). Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia. El reasentamiento de hecho y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización. En e. y. Desplazamiento Forzado. Dinámicas de guerra, *Bello, Martha Nubia* (pp. 279 – 309). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia / ACNUR.

Naranjo, G. (2010). *Ciudades y Desplazamiento Forzado en Colombia, El “reasentamiento de hecho” y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización*. Recuperado el 2012, de www.docudesk.com: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Basica/Gloria%20Naranjo.pdf

Naranjo, G., & Hurtado, D. (2002). El derecho a la ciudad. Migrantes y desplazados en las ciudades colombianas. *Desde la región, Medellín*.

Navas, Y. M. (2010). Barrio: Café Madrid. *Plan de desarrollo comunitario*. Bucaramanga: Visión Mundial.

Olarte Carreño, A. (2006). *La construcción del ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga- 1870-1941*. Bucaramanga: http://www.llibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?c=1.

Orosio, P. A., & Villamizar, D. M. (2008). *Análisis de la situación de seguridad alimentaria e incidencia de la política pública en Bucaramanga*. Recuperado el 2011, de Biblioteca UIS.

Román Ordóñez, S. (2008). *La situación del derecho a la educación de niños y niñas en situación de desplazamiento*. Recuperado el Octubre de 2011, de Biblioteca UIS.

Romero Picón, Y. (2006). *tramas y urdimbres sociales en la ciudad*. *Universitas Humanística*, 217-228.

Segura, N., & Meertens, D. (1997). Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia. *Nueva Sociedad*, 30-43.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Buenos Aires: Editorial Planeta.

Sen, A., & Kliksberg, B. (2007). *Primero la gente*. Barcelona: Ediciones Deusto.

Silva Arias, C. (2009). La diáspora de los desplazados forzados en los mercados laborales colombianos. *Revista FENADECO* .

Tezanos, J. F. (1999). *Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias sociales*. Madrid: Editorial Sistema.

Torres Tovar, C. A. (s.f). *La ciudad como espacio de inclusión*. Recuperado el 2011, de Biblioteca Digital Universidad Nacional de Colombia: http://www.bdigital.unal.edu.co/782/16/318_-_15_Capi_14.pdf

Valdivieso, S. (2001). *Bucaramanga: historias de setenta y cinco años*. Bucaramanga: Cámara de Comercio.

Velásquez, L. (2010). De la conceptualización a la medición de la pobreza en Colombia: dificultades y alternativas. *Virajes, Revista de Antropología y Sociología*, 15-45.

Zarama Vásquez, E. (2009). *Generación de ingresos para la población desplazada en Colombia, perspectiva desde abajo*. Santiago de Chile: Cepal.